

2025 a marzo 2026



**NCA**

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la  
COALICO

# BOLETÍN DE MONITOREO

EDICIÓN ESPECIAL

## EL RIESGO NO CESA

Escuelas en riesgo: ataques, ocupación y vulneración del  
derecho a la educación



SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS  
COLOMBIA

# BOLETÍN DE MONITOREO

EDICIÓN ESPECIAL

EL RIESGO NO CESA

## Escuelas en riesgo: ataques, ocupación y vulneración del derecho a la educación

Resultado del ejercicio de monitoreo de eventos que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos de conflicto armado y violencias asociadas, presentados durante el 2025 hasta marzo de 2026.

Elaborado por:

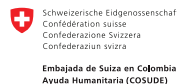
Ana María Centeno Vanegas  
Felipe Vásquez González  
Hilda Beatriz Molano Casas  
Ismael Caicedo Ocampo  
Mariana Medina Barragán



COALICO



Con el apoyo de:



La presente publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea, incluyendo la representación en el país de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). También contó con el apoyo del Movimiento de Niñ@s Católic@s de Austria - DKA, la Oficina Internacional de los Derechos del Niño en Canadá - IBCR y ACT - Iglesia Sueca. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la COALICO y no refleja necesariamente los puntos de vista de las entidades financiadoras.

Este boletín es resultado de un trabajo conjunto entre la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), plataforma de organizaciones de la sociedad civil, y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL), organización integrante de esta coalición, orientado a visibilizar y analizar las afectaciones persistentes al derecho a la educación en contextos de conflicto armado y violencias asociadas. Se inscribe en la línea de seguimiento “El riesgo no cesa”, que da continuidad a publicaciones previas de la sociedad civil a través de las cuales se ha documentado la permanencia, transformación y expansión de las violencias en los territorios.

En el marco de la conmemoración del Día del maestro y la maestra, este boletín especializado propone un análisis focalizado y basado en la evidencia del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) sobre una de las afectaciones más críticas del conflicto armado, debido a los impactos en la población civil: los ataques y la ocupación de escuelas y universidades. Lejos de ser hechos aislados, estos eventos responden a lógicas de control territorial y uso estratégico de la infraestructura educativa por parte de actores armados, lo que transforma los entornos escolares en escenarios de riesgo para niñas, niños y adolescentes, así como para el personal docente y directivo, y en general para todos los actores que integran el sistema educativo. A ello se suman las amenazas, intimidaciones y múltiples agresiones contra integrantes de este entorno, que profundizan el miedo, afectan la permanencia escolar y debilitan las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación.

La información sistematizada por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (en adelante ONCA) permite identificar algunos elementos de recurrencia, modalidades de afectación y consecuencias acumulativas que van desde la interrupción prolongada de los procesos educativos hasta la exposición a otras graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo muerte, reclutamiento ilícito y uso, violencia sexual, restricciones a la libertad personal, incidentes causados por artefactos explosivos, desplazamiento y confinamiento.

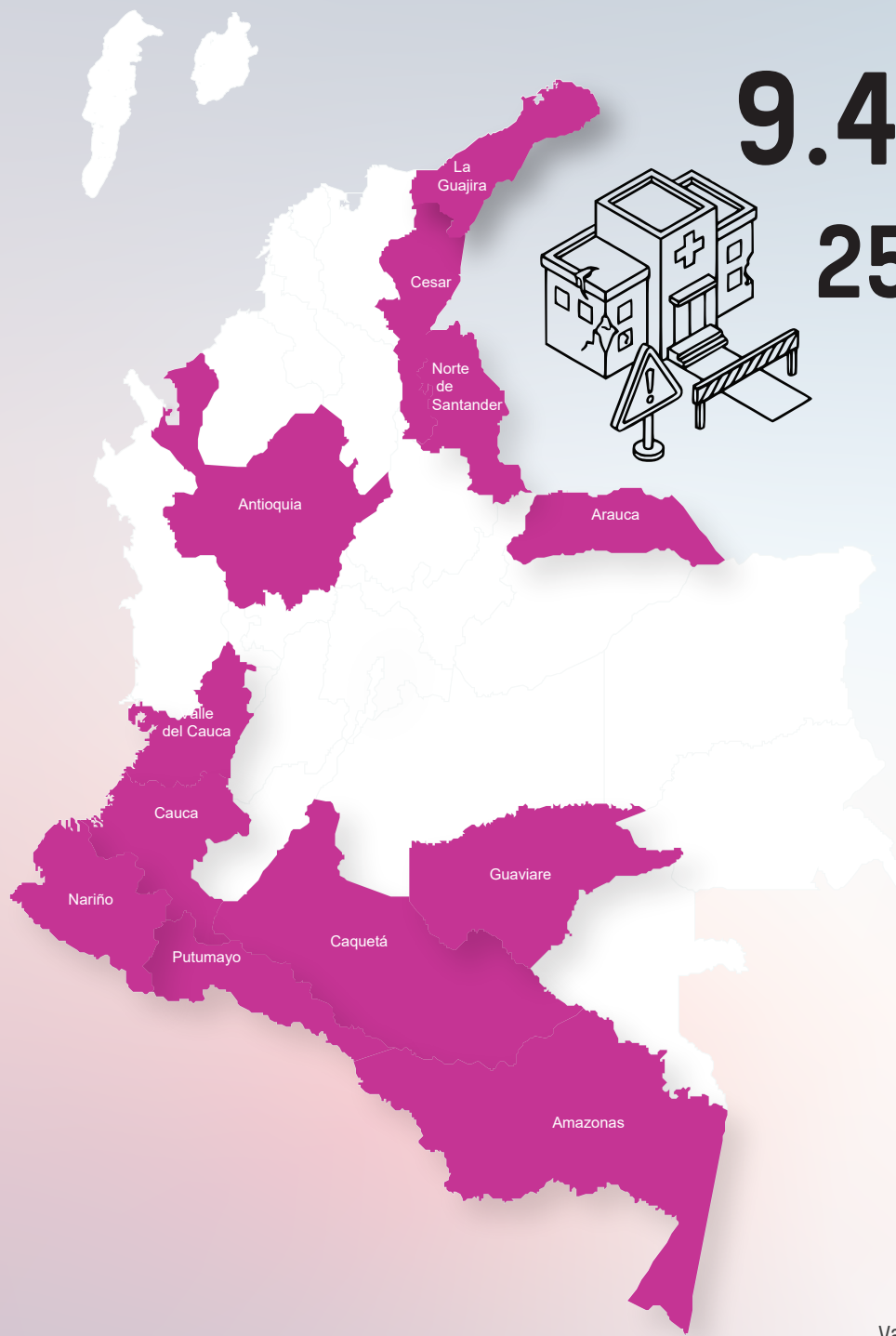
Este boletín busca aportar elementos para la comprensión de estas violaciones, visibilizar su impacto estructural y sustentar la urgencia de medidas de protección integrales que garanticen que las escuelas y las instituciones de educación superior, en cualquier territorio, sean espacios protectores y protegidos.

# ATAQUES Y OCUPACIÓN DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES:

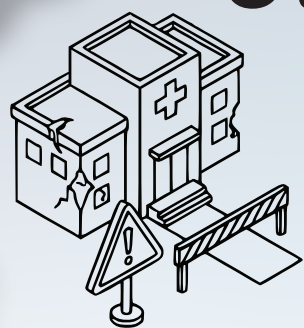
## cuando el conflicto armado entra al aula

Los ataques contra escuelas y universidades no son únicamente los más visibles (un artefacto que explota, una ráfaga de disparos, una institución convertida en trinchera) sino que forman parte de un entramado más amplio de violencias que erosionan, de manera silenciosa pero sistemática, el derecho a la educación. Las amenazas a docentes, el control territorial impuesto por grupos armados, los bloqueos de vías por, desde y hacia la escuela, los confinamientos y el miedo que se instala en las comunidades generan interrupciones constantes en la vida escolar y alimentan la deserción. En este sentido, la afectación a la educación debe leerse de manera integral: no como hechos aislados, sino como el resultado de condiciones estructurales en las que la violencia se normaliza, los espacios protectores se deterioran y las oportunidades de futuro se cierran antes de que lleguen a abrirse.

En Colombia, los ataques y la ocupación de instituciones educativas revelan una tendencia que el monitoreo del ONCA ha documentado con preocupación creciente: el conflicto armado no rodea la escuela, la atraviesa. Las instituciones educativas, particularmente aquellas ubicadas cerca de estaciones de policía o instalaciones militares o en territorios en disputa entre grupos armados, se convierten en escenarios de confrontación. Esto no solo interrumpe procesos pedagógicos, sino que debilita el tejido comunitario que sostiene la vida escolar y limita las posibilidades de construcción de paz territorial. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en su informe “Ataques a la educación en Colombia (2017-2025)”, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en número de ataques contra la educación y el primero en el hemisferio occidental. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta septiembre de 2025, se registró en promedio un ataque a un centro educativo cada cuatro días. En los primeros meses del año anterior se intensificó este hecho, registrándose un ataque cada dos días.



**9.471** niñas, niños y adolescentes víctimas



**25** Eventos implicaron afectación directa a niñas, niños y adolescentes



**48%**  
De las víctimas son indígenas (4.570)

	No. de eventos por dpto.	No. de víctimas
Cauca	7	4.390
Cesar	1	2.000
Antioquia	3	1.795
La Guajira	1	700
Caquetá	2	393
Nariño	4	184
Arauca	1	9
Amazonas	1	N.D.
Guaviare	1	N.D.
Putumayo	1	N.D.
Valle del Cauca	3	N.D.

\* N.D.  
No determinado

**D**urante 2025, el ONCA monitoreó 25 eventos de ataques y ocupación de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, con afectaciones a aproximadamente 9.471 niñas, niños y adolescentes. Los departamentos con mayor concentración de víctimas fueron Cauca (4.390), Cesar (2.000) y Antioquia (1.795). El 48% de las víctimas identificadas étnica y racialmente pertenecían a comunidades indígenas, lo que evidencia una dimensión diferencial que exige respuestas con enfoque territorial.

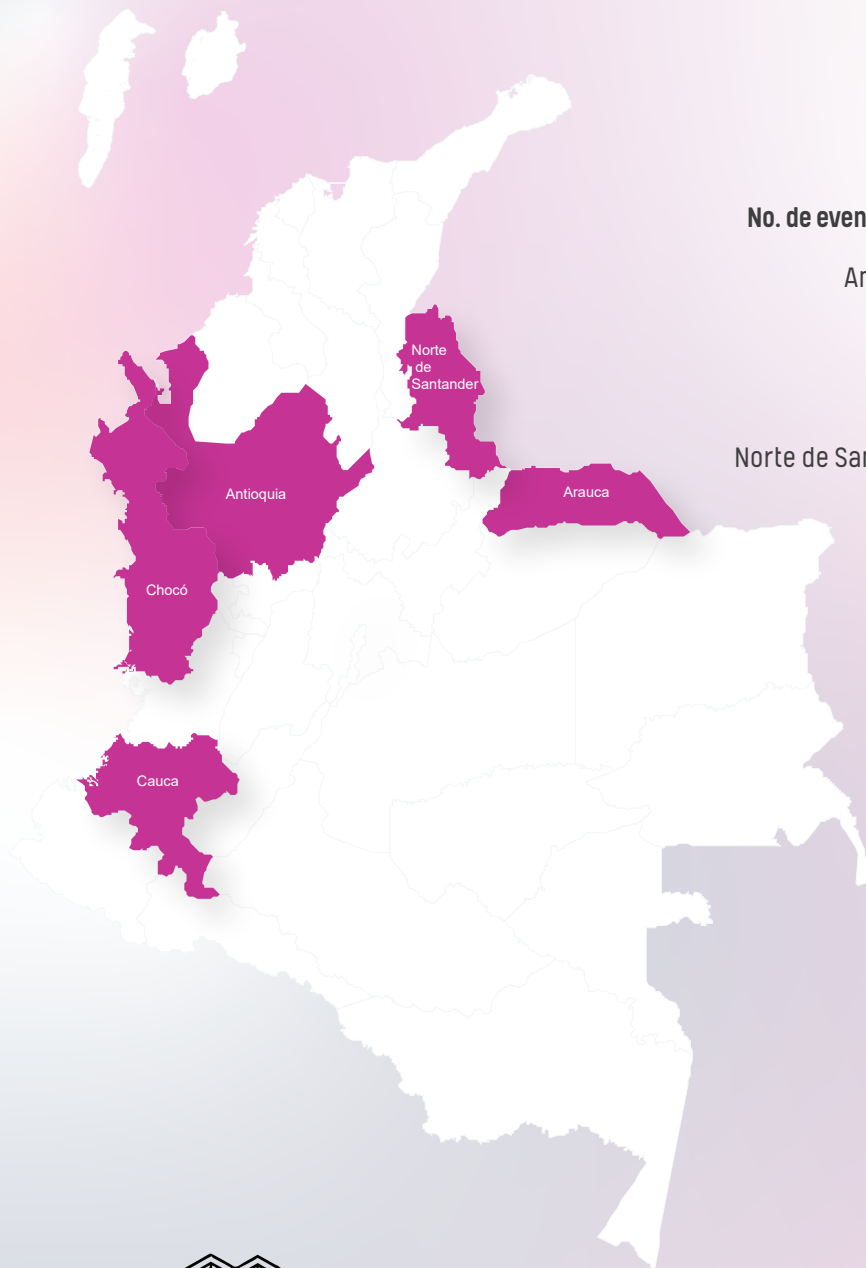
La línea que se consolidó durante el año 2025 fue clara: las escuelas fueron utilizadas como trincheras, puntos de instalación temporal o escenarios de confrontación entre grupos armados y la Fuerza Pública. En varios casos, artefactos explosivos fueron detonados en inmediaciones de colegios o abandonados en su interior, dejando daños materiales, contaminación por explosivos y un clima de terror que se instaló en las comunidades educativas, como ocurrió en Caloto (Cauca), en donde alrededor de 300 estudiantes dejaron de asistir a clases como consecuencia directa de ataques de disidencias de las FARC-EP a la estación de policía ubicada frente a la institución educativa. Tras un atentado con una moto cargada con explosivos, las familias decidieron no enviar a sus hijos e hijas a la escuela, no por una orden externa, sino por el miedo que este hecho ocasionó en los habitantes del barrio.

Al respecto, debe destacarse que, durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2025, la crisis humanitaria en Buenaventura se ha agudizado de manera alarmante, registrándose al menos tres eventos de confinamiento en las regiones del Bajo Calima y Zacarías que vulneraron la integridad de al menos, 837 niñas y niños, de los cuales el 90% pertenece a comunidades afrodescendientes y el 10% a pueblos indígenas. Esta situación de encierro forzado actúa como una barrera insalvable para el derecho a la educación, ya que el control territorial de los actores armados impide que las y los estudiantes, así como el personal docente, accedan a los centros educativos, convirtiendo la escuela en un espacio inalcanzable y fracturando el entorno protector de la infancia. La persistencia de esta violencia ha detonado, a su vez, desplazamientos masivos que han afectado directamente a 299 niñas y niños –de los cuales 185 se reconocen como afrodescendientes–, provocando una ruptura abrupta y traumática en sus trayectorias escolares, ya que al verse obligados a huir

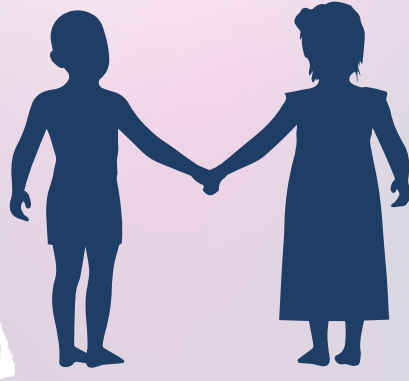
de sus territorios, las niñas, niños y adolescentes pierden su continuidad pedagógica y sus redes de apoyo, lo que profundiza las brechas de desigualdad y los expone a riesgos de reclutamiento o explotación, comprometiendo gravemente el tejido social y el futuro generacional de las comunidades étnicas de la región.

En lo corrido de 2026, los ataques contra escuelas se han concentrado en Cauca, Antioquia, Chocó, Arauca y Norte de Santander, que son territorios con una fuerte presencia de grupos armados en disputa y con dinámicas de conflicto prolongadas. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio, para el primer trimestre del año, se registraron seis eventos de ataques y ocupación de escuelas y otros bienes civiles, con un total de 1.122 niñas, niños y adolescentes afectados, de los cuales el 28,88% eran afrodescendientes (324 personas). Tres de estos eventos estuvieron relacionados con detonaciones de artefactos explosivos que incluyeron el uso de drones cerca de instituciones educativas, y otros tres con confinamientos que impidieron el acceso físico a las escuelas. En Norte de Santander, la instalación de minas antipersonal en los caminos que conducen a instituciones educativas produjo lesiones a dos niños, un recordatorio que, en muchos territorios, el trayecto escolar es en sí mismo un escenario de riesgo.

Este boletín también dirige la mirada hacia los entornos urbanos, donde las dinámicas del conflicto y del crimen organizado reconfiguran de manera silenciosa pero sostenida la vida de niñas, niños y adolescentes. El artículo, *Geografías urbanas violentadas: Apropiación y disputa territorial a través del güireo y el chacaleo en Cali, Valle del Cauca*, revisa cómo prácticas locales de control social y económico se articulan con lógicas de dominación territorial que atraviesan barrios y comunidades, afectando directamente las trayectorias de vida, la permanencia escolar y las condiciones de protección. Este análisis permite comprender que las violencias no se limitan a escenarios rurales o de confrontación armada abierta, sino que también se expresan en contextos urbanos mediante mecanismos cotidianos que normalizan el riesgo y restringen derechos. Incorporar esta lectura amplía el alcance del boletín y refuerza la necesidad de respuestas integrales que reconozcan la especificidad de las violencias urbanas y su impacto diferenciado en la niñez y la adolescencia.

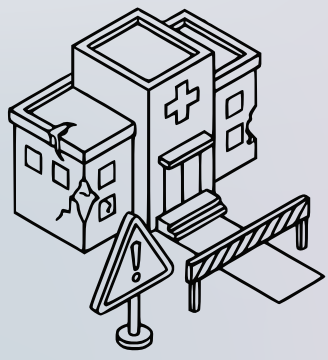


No. de eventos por dpto.	No. de víctimas por dpto.
Antioquia	605
Arauca	22
Cauca	169
Chocó	324
Norte de Santander	2



**1.122** niñas, niños y adolescentes víctimas

**6** Eventos implicaron afectación directa a niñas, niños y adolescentes



**28,88%**  
De las víctimas son afrodescendientes (324)



# GEOGRAFÍAS URBANAS VIOLENTADAS:

## Apropiación y disputa territorial a través del güireo y el chacaleo en Cali, Valle del Cauca

Por: *Ismael Caicedo Ocampo* - Profesional de la Secretaría Técnica de la COALICO

*“Ritmos que segregan y estéticas que matan: La mutación de la identidad juvenil, hacia el outsourcing criminal en la vulnerabilidad invisibilizada de Cali”.*

El güireo y el chacaleo han dejado de ser expresiones juveniles aisladas para convertirse en escenarios funcionales a dinámicas de control territorial y vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales en Cali. Lejos de operar únicamente en calles o barrios, estas prácticas se articulan con entornos escolares, donde circulan códigos de reconocimiento, jerarquías de violencia y mecanismos de selección que hoy están siendo instrumentalizados por Grupos Delictivos Organizados (GDO) como parte de un esquema de cooptación progresiva.


Comprender los conceptos de güireo y chacaleo implica retroceder más de dos décadas e interpretar el contexto urbano y social en el que emergieron. Hablar de sus inicios y de sus principales precursores no es un ejercicio nostálgico, sino una necesidad para diseñar políticas públicas que aborden el problema desde su raíz: un fenómeno que ha mutado con el paso de los años y que hoy ha cobrado un número significativo de víctimas.

Desde mediados de los años 2000 [1], los “parches” juveniles vinculados a colegios y barrios comenzaron a consolidar formas de reconocimiento basadas en la visibilidad, la confrontación y la pertenencia territorial. Aunque estas dinámicas surgieron inicialmente como expresiones simbólicas de identidad y afiliación grupal, con el tiempo evolucionaron hacia escenarios de disputa y violencia física. Este proceso sentó las bases de fenómenos que hoy se manifiestan en prácticas como el güireo y el chacaleo, entendidas como enfrentamientos violentos entre grupos de jóvenes de distintos barrios, cuya magnitud, frecuencia e impacto se han incrementado progresivamente en los contextos urbanos.

En este escenario, las estructuras armadas y organizaciones criminales encontraron en los grupos juveniles involucrados un espacio propicio para ampliar sus redes de influencia y reclutamiento. La capacidad de convocatoria, el reconocimiento territorial y los vínculos de pertenencia construidos alrededor de estas dinámicas facilitaron la identificación y posterior captación de algunos de sus integrantes, quienes fueron vinculados a actividades delictivas mediante incentivos asociados al poder y al estatus, como dinero, armas, motocicletas y formas de reconocimiento social ligadas al crimen organizado.

Un elemento crítico, insuficientemente visibilizado, es la relación directa entre estas dinámicas y los entornos escolares. En este contexto, los colegios no solo funcionan como espacios de socialización donde se originan o reproducen los “parches”, sino como escenarios donde se configuran jerarquías de reconocimiento, se legitiman prácticas de confrontación y se identifican perfiles de liderazgo que posteriormente son observados y cooptados por estructuras criminales. En este sentido, el güireo no ocurre por fuera de la escuela: se alimenta de ella, se organiza desde ella y proyecta su lógica de disputa territorial hacia el entorno barrial.

Esta conexión plantea un desafío directo a la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras en Colombia, ya que los entornos educativos están siendo atravesados no solo por riesgos externos, sino también por dinámicas internas que facilitan la vinculación progresiva de niñas, niños y adolescentes a economías ilegales y estructuras violentas, sin que exista aún un reconocimiento institucional suficiente de estos mecanismos.



Como se señaló, lo que inicialmente surgió como una expresión juvenil de apropiación simbólica y territorial derivó no solo en hechos letales, sino también en la vinculación de jóvenes –principalmente del oriente de Cali– a redes criminales asociadas al microtráfico. Con el tiempo, esta dinámica dejó de involucrar mayoritariamente a adolescentes de sectores medios y se concentró en las comunas más afectadas por condiciones de precariedad y violencia estructural, factores que favorecieron su expansión y consolidación.

Según información recogida por COALICO mediante entrevistas a actores institucionales del nivel departamental (2026), estas dinámicas han dejado de ser simples disputas barriales para convertirse en el “primer eslabón” de la cooptación criminal. En esta lógica, el güireo deja de ser un enfrentamiento espontáneo para convertirse en un dispositivo de evaluación y selección. Las estructuras criminales observan estos escenarios para identificar habilidades específicas como capacidad de confrontación, liderazgo, lealtad y resistencia a la violencia, que posteriormente son incorporadas a dinámicas delictivas más estructuradas. Este proceso constituye una forma de vinculación progresiva que no inicia necesariamente con el uso de armas, sino con la validación social de la violencia entre pares.

De acuerdo con información recogida por COALICO mediante entrevistas a actores institucionales en territorio (2026):

“El güireo es como un entrenamiento para ver cuáles son los mejores en la pelea, para ellos empezarlos a fortalecer en las otras estructuras... ahí es donde los empiezan a probar y a mirar qué tan fuertes son esos muchachos”.

En el caso de las niñas y adolescentes, la vinculación a estas dinámicas responde a lógicas diferenciadas, en las que el reconocimiento social y el acceso a determinados espacios de pertenencia suelen estar atravesados por relaciones de control, explotación y violencias sexuales y basadas en género. A diferencia de los hombres jóvenes, cuya incorporación suele asociarse a ejercicios de poder territorial o participación directa en economías ilegales, las niñas y adolescentes son frecuentemente instrumentalizadas mediante mecanismos de subordinación y dominación que permanecen profundamente invisibilizados.

Estas violencias no solo están insuficientemente documentadas, sino que además continúan siendo abordadas de manera fragmentada por la política pública, pese a que constituyen expresiones claras de las violencias basadas en género vinculadas tanto al conflicto armado como a las dinámicas de delincuencia organizada. La ausencia de respuestas diferenciadas ha contribuido a la naturalización de estas formas de violencia y a la persistencia de altos niveles de impunidad y desprotección para las víctimas.

A estas transformaciones se suma un elemento cada vez más relevante en la configuración de las dinámicas juveniles: el papel de los entornos digitales y las redes sociales. Según el DANE, en su Boletín de Mercado Laboral de la Juventud (abril-junio de 2024), el 47,7 % de las y los jóvenes consultados manifestó su interés en trabajar como influencer, lo que refleja la centralidad que hoy tienen las plataformas digitales en los proyectos de vida, las formas de reconocimiento y las expectativas de proyección social de las nuevas generaciones.

Sin embargo, esta mayor presencia y circulación en entornos digitales ocurre en un contexto atravesado por profundas desigualdades sociales, limitadas oportunidades educativas y laborales, y una cultura que otorga un alto valor simbólico al dinero, el consumo, el reconocimiento social y las posesiones materiales. Estas condiciones han sido aprovechadas por estructuras criminales que han logrado insertarse estratégicamente en redes sociales y plataformas digitales para acercarse a adolescentes y jóvenes mediante discursos aspiracionales, exhibiciones de poder económico y narrativas asociadas al estatus y la pertenencia.

Así, espacios como TikTok, Instagram o Facebook no solo funcionan como escenarios de interacción, creatividad y proyección personal, sino también como entornos donde actores criminales despliegan estrategias de captación y cooptación juvenil. En las periferias de Cali, las dinámicas que circulan en redes sociales tienden a entrelazarse con las estéticas asociadas al chacaleo y a las estructuras delictivas, reproduciendo códigos culturales y visuales vinculados al poder económico ilegal y a formas de reconocimiento sustentadas en la violencia y el control territorial.

De esta manera, los grupos criminales han logrado adaptar sus mecanismos de reclutamiento a los lenguajes y dinámicas predominantes en el ecosistema digital, aprovechando la búsqueda legítima de reconocimiento, pertenencia y proyección personal de adolescentes y jóvenes. En consecuencia, las redes sociales se convierten también en espacios donde se normalizan referentes asociados a economías ilegales, facilitando procesos de acercamiento y vinculación progresiva, especialmente en contextos marcados por la exclusión social y la ausencia de oportunidades reales de movilidad social.

Las consecuencias de estas dinámicas se reflejan en los altos niveles de violencia letal que afectan a la juventud caleña. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en *Forensis 2025*, Cali registró 1.107 homicidios de adolescentes y jóvenes, alcanzando una tasa de 47,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las principales ciudades del país. El Valle del Cauca, además, lideró las cifras nacionales de homicidios juveniles.

Pese a ello, la política pública local continúa abordando el fenómeno principalmente desde el marco del conflicto armado, lo que deja vacíos importantes para comprender las particularidades que hoy adquieren estas dinámicas urbanas en Cali. Tanto el chacaleo –expresado en fiestas callejeras de alto riesgo atravesadas por actores vinculados al microtráfico y al consumo de licor adulterado– como el güireo –manifestado en enfrentamientos colectivos con disputas territoriales– están claramente influenciados por estructuras criminales y economías ilegales que han sofisticado sus mecanismos de captación y control juvenil.

Según información recogida por COALICO mediante entrevistas a actores institucionales del nivel departamental (2026):

“Hay una línea súper delgada, no hay una demarcación real de en qué momento los adolescentes pasan de la dinámica juvenil, a la actividad criminal... En el Valle del Cauca hay un outsourcing criminal porque está el narcotráfico colombiano y también el tema con México, poniendo en mayor factor de riesgo a estos muchachos”.

En este sentido, los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y las dinámicas criminales tercerizadas no solo han logrado infiltrar estas prácticas en colegios, parques y esquinas, sino también financiarlas e instrumentalizarlas para sus propios fines. El estudio *Homicidios juveniles en Santiago de Cali 2005-2009*, publicado por la Alcaldía de Cali en 2010, ya advertía la existencia de más de 125 pandillas en la ciudad, lo que facilitó posteriormente la transición de algunos liderazgos juveniles hacia estructuras del crimen organizado.

Esta problemática no se limita a la capital del Valle del Cauca. Municipios como Pradera evidencian niveles críticos de instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de bandas asociadas al microtráfico, las cuales han reforzado las fronteras invisibles mediante la utilización deliberada de personas menores de edad armadas para proteger sus dinámicas delictivas.

De acuerdo con el monitoreo realizado por COALICO en abril de 2026, se han registrado casos en los que niñas y niños han sido instrumentalizados en acciones armadas, incluyendo situaciones en las que personas menores de 18 años –e incluso menores de 10 años– han accionado armas de fuego contra miembros de la fuerza pública. Este tipo de hechos no solo evidencian la ruptura de los entornos protectores, sino que refuerzan la tesis de que las estructuras criminales han convertido el escenario juvenil en un espacio de entrenamiento, evaluación y ejecución violenta desde edades cada vez más tempranas.

El reto de la política pública consiste, entonces, en comprender las raíces del güireo y el chacaleo, sus transformaciones y los procesos mediante los cuales estas dinámicas han sido cooptadas e instrumentalizadas por estructuras criminales. Niñas, niños y adolescentes buscan pertenencia, identidad y reconocimiento; necesidades que históricamente no han sido suficientemente atendidas por el Estado y que hoy continúan siendo aprovechadas por actores ilegales para fortalecer sus redes de influencia y control territorial.

Existe, además, una desconexión crítica entre la complejidad del fenómeno y la forma en que este es comprendido institucionalmente. La ausencia de reconocimiento del güireo y el chacaleo –tanto como concepto como en sus manifestaciones concretas dentro de los entornos escolares y comunitarios– ha contribuido a invisibilizar mecanismos de captación que hoy son plenamente identificados y explotados por estructuras criminales adultas.

De acuerdo con información recogida por COALICO mediante entrevistas a actores institucionales en territorio (2026):

“Estos hechos hacen parte de unas dinámicas de identificación, uso y utilización de los adolescentes por parte de los adultos, los cuales ya analizaron las dinámicas económicas, sociales, familiares y de violencia que viven estos adolescentes y que pueden ser fácilmente convencidos para generar confrontaciones entre pares”.

En las periferias urbanas convergen múltiples factores de vulnerabilidad: comunidades segregadas, familias afectadas por el conflicto armado, profundas situaciones de desarraigo y niños, niñas y adolescentes que crecen

en contextos marcados por la ausencia de cuidado y acompañamiento cotidiano. En muchos casos, las dinámicas económicas obligan a madres y cuidadoras a trabajar largas jornadas o desplazarse a otras ciudades, mientras la oferta institucional continúa siendo insuficiente y reactiva.

El desafío actual para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y las mesas técnicas municipales consiste en lograr que las estrategias de prevención avancen al mismo ritmo que la sofisticación de las estructuras criminales, las cuales han desarrollado una comprensión profunda de las necesidades, carencias y aspiraciones juveniles. Mientras no se reconozca que el güireo y el chacaleo están operando como mecanismos de identificación, prueba y vinculación progresiva de niñas, niños y adolescentes –muchas veces desde entornos escolares y digitales–, las respuestas institucionales continuarán siendo tardías e insuficientes.

La prevención no puede limitarse a ampliar la oferta institucional; requiere intervenir de manera integral los espacios donde hoy se configura el riesgo: la escuela, el barrio y el entorno digital. De lo contrario, el Estado, la familia y la sociedad seguirán llegando cuando la vinculación a las dinámicas criminales ya se ha producido.



# Referencias bibliográficas

**Alcaldía de Santiago de Cali**  
(2010).

*Homicidios juveniles en Santiago de Cali 2005-2009.*  
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. Santiago  
de Cali, Colombia.

**Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes  
al conflicto armado en Colombia - COALICO**  
(2026).

*Base de datos cualitativa: entrevistas semiestructuradas  
a actores institucionales en territorio y monitoreo de  
graves violaciones contra niñas, niños y adolescentes  
(Valle del Cauca, enero-marzo 2026).* Documento de  
trabajo no publicado. Archivo interno de investigación.

**Comisión Intersectorial para la Prevención del  
Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra  
Niñas, Niños y Adolescentes**  
(2019).

*Línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento,  
Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y  
Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados  
(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).* Bogotá,  
Colombia.

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  
DANE**  
(2024).

*Boletín técnico: Mercado laboral de la juventud. Trimestre  
abril-junio 2024.* Dirección de Metodología y Producción  
Estadística (DIMPE). Bogotá, Colombia.

**Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses**  
(2025).

*Forensis 2025: Datos para la vida. Informe anual de  
lesiones de causa externa en Colombia.* Dirección de  
Metodología y Producción Estadística (DIMPE).  
Bogotá, Colombia.

[1] Entre 2004 y 2005, adolescentes y jóvenes principalmente de estratos 3 y 4 comenzaron a conformar “parches” asociados a colegios y barrios. Influenciados por la expansión del reguetón, adoptaron nombres inspirados en disqueras y letras del género: *Gold Star, Flow Factory, War Records, Maklavélicos, El Cartel, La Guetto* y *Fabela Full Records*. Sin embargo, los grupos que más marcaron la memoria urbana fueron La Alianza, Los Contra y La Rompe.

Estas dinámicas juveniles generaron procesos de reconocimiento, estatus, respeto y poder simbólico en distintos sectores de la ciudad. Para 2007, el fenómeno ya estaba ampliamente consolidado y migró a plataformas digitales como **Hi5**, desde donde se realizaban convocatorias a encuentros y fiestas conocidas como rumbas, farras o perrees en barrios del oriente y el sur de Cali.

A estos espacios acudían adolescentes en vehículos lujosos, una imagen que contrastaba de forma abrupta con las condiciones socioeconómicas de los barrios anfitriones y de los jóvenes que los habitaban. El choque de realidades generó progresivamente, en enfrentamientos violentos que inicialmente se libraban a golpes, pero que luego escalaron al uso de armas cortopunzantes, bates, piedras y otros objetos que dejaron heridos de gravedad.

En este contexto emergió el concepto de “**farándula**”, inspirado inicialmente por artistas del reguetón como *J-King & Maximan*. El reconocimiento y la visibilidad en redes (como **Hi5** en su momento, Instagram/TikTok hoy) pueden operar como formas de capital simbólico que compensan la falta de capital económico.

Pero para ese tiempo, el término designaba al adolescente con mayor visibilidad en redes sociales, más popular, con prestigio en las confrontaciones y capacidad de “defenderse” en la calle. Tras las trifulcas, era común la publicación de fotografías que mostraban a los participantes como vencedores, incluso cuando algunos lograban aparecer referenciados en medios de comunicación.

La dinámica en estos mundos de vida juvenil estaba regida por códigos estrictos: Cortes de cabello específicos rapado a los lados y largo atrás, peinados llamativos, ropa colorida, gafas y gorras que funcionaban como marcadores identitarios. El consumo de drogas, alcohol y la sexualidad temprana también se incorporaron como elementos habituales del fenómeno. Los medios de comunicación, especialmente las emisoras radiales, cumplieron un papel clave al difundir convocatorias a fiestas en distintos barrios, en muchos casos promovidas por líderes locales.

El punto de quiebre llegó en 2010. Durante una convocatoria en el Centro Comercial El Único fue asesinado Pinky Lora, un joven proveniente del sector de Siloé. Su muerte marcó un antes y un después: los enfrentamientos se profundizaron, los odios y las venganzas se intensificaron, y las puñaladas dieron paso a asesinatos sistemáticos. Aunque no existen cifras consolidadas de Medicina Legal sobre las víctimas de estos enfrentamientos, aunque no existen cifras consolidadas, diversas fuentes coinciden en que el número de víctimas fue significativo.

# BOLETÍN DE MONITOREO

EDICIÓN ESPECIAL

EL RIESGO NO CESA

## Escuelas en riesgo: ataques, ocupación y vulneración del derecho a la educación

Resultado del ejercicio de monitoreo de eventos que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos de conflicto armado y violencias asociadas, presentados durante el 2025 hasta marzo de 2026.

© Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

### Conformada por:

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ)

Benposta Nación de Muchach@s Colombia

Centro de Desarrollo Psicosocial - Taller de Vida

Corporación Vínculos

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Colombia)

Fundación Creciendo Unidos (FCU)

Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL)

Warchild Colombia

World Vision Colombia

### Elaborado por:

Ana María Centeno Vanegas

Felipe Vásquez González

Hilda Beatriz Molano Casas

Ismael Caicedo Ocampo

Mariana Medina Barragán

### Información de contacto:

E-mail: [observatorio@coalico.org](mailto:observatorio@coalico.org) / [comunicaciones@coalico.org](mailto:comunicaciones@coalico.org)

Teléfono: (57) 310 8026396

Bogotá - Colombia

### Visite nuestras redes sociales

